

Editorial

Los avances en la producción y distribución de una o varias vacunas contra el COVID 19 han permitido que este año, el segundo desde el comienzo de la pandemia, empecemos a recuperar algunas de las características de nuestro comportamiento previo a esta situación. Si bien hay quienes esperan que de esta transición emerja una “nueva normalidad”, aún es temprano para hacer un corte de cuentas sobre las transformaciones que probablemente vendrán. En todo caso, lo que sí aparece como un elemento protuberante es la pregunta sobre la política social y sus retos.

En efecto, para enfrentar algunos de los efectos sociales de la pandemia, la mayoría de Estados recurrieron a sus clásicas herramientas de asistencia socioeconómica y, rápidamente, innovaron con medidas para atender a una mayor población u ofrecer los servicios con mayor velocidad. Ciertamente, se trató de un experimento de innovación a gran escala y con efectos mayoritariamente positivos. Este número de *Opinión Pública* se ocupa, en parte, de poner su atención sobre la política social, para seguir la senda de cada vez mayor rigor y especialización de la revista. Por ello, de los cinco artículos del número, tres atienden asuntos relacionados con la política social; los dos restantes le apuntan a procesos empresariales.

El primero de ellos se titula “El juez constitucional como regulador de los servicios públicos en Colombia: el caso de las decisiones judiciales sobre mínimo vital de agua potable”, escrito por Germán Darío Isaza Cardozo, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada. El texto resalta la creación de la institución del “mínimo vital de agua potable” por parte de la Corte Constitucional de Colombia como un avance en la garantía de derechos. Sin embargo, analiza críticamente esta situación para sugerir que, al tomar este tipo de decisiones, la Corte asume funciones que no le corresponden, relacionadas con la regulación de los servicios públicos domiciliarios.

El siguiente artículo, “Teorías keynesianas vs neoclásicas: una confrontación empírica de las políticas económicas en Bogotá y su impacto en el empleo entre 2012-2019”, de David Andrés Duarte y Ehyder Mario Barbosa, presenta una evaluación de las políticas económicas de las dos últimas administraciones de Bogotá: la de Gustavo Petro y la de Enrique Peñalosa. El artículo sugiere que el primero representa un enfoque keynesiano para el problema del desempleo, mientras que el segundo se asocia con la escuela neoclásica. A partir del parangón entre los dos modelos, Duarte y Barbosa argumentan que la Alcaldía de Petro fue más eficiente a la hora de enfrentarse al desempleo.

Para seguir con el análisis de la política social y utilizar un referente internacional, Jhosman Gerliud Barbosa Domínguez presenta “La política social cubana: una revisión de los elementos centrales que la definen”. En el artículo, Barbosa analiza la política social de Cuba a partir de tres ejes: la actualización del modelo económico, la batalla de ideas y los lineamientos de política económica y social. El artículo sugiere que la existencia de una política social y estatizada es consustancial a la existencia del socialismo en la isla.

También desde el enfoque internacional, en el artículo “Una perspectiva de los procesos de internacionalización en el sector textil de Colombia”, Karen Gutiérrez Rodríguez, Fernanda Medina Viña y Diana Catalina Carvajal Rojas presentan una amplia revisión de literatura sobre la industria textil colombiana desde 2016 a 2021. Revisando los incentivos, barreras, retos, oportunidades y formas de ingreso al mercado internacional, las autoras encuentran que el sector textil está en constante cambio; además, señalan que los pequeños empresarios carecen de incentivos estatales para el fortalecimiento de sus operaciones.

Finalmente, en “Asociatividad empresarial como una estrategia para la competitividad”, Andrés Camilo Aponte López revisa la literatura académica sobre la asociatividad empresarial como una estrategia que permite la gestión del conocimiento y el impulso a la innovación. El autor encuentra que la asociatividad empresarial es clave para el aumento de la competitividad a través de dispositivos como los distritos industriales, las redes empresariales y los ecosistemas colaborativos.

Opinión Pública agradece a los autores por sus contribuciones, e invita a los lectores a que consideren esta revista como la plataforma para publicar los resultados de sus investigaciones.

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ LUNA
Editor en jefe